

El ecofascismo que viene

EVA G. SEMPERE

Bióloga. Coordinadora federal del Área de Medio Ambiente de Izquierda Unida



*La crisis ecológica es tan seria
que es urgente no hacer nada al respecto.*

MICHAEL LÖWY parodiando las conclusiones
de las grandes cumbres del clima

89

Hace ya tiempo que se viene alertando de que el decrecimiento no es una opción que podamos elegir. El acaparamiento de tierras, la entrada del agua en el mercado de futuros, los picos de los combustibles fósiles y la búsqueda a la carrera de nuevos yacimientos de minerales, los crecientes desplazados ambientales, nos hablan de que ya es una realidad el decrecimiento.

Sabemos, y especialmente lo sabe el capital, que hemos de decrecer en términos globales el consumo de recursos naturales. Pretender que se haga de igual manera entre quienes nos han traído hasta esta situación, enriqueciéndose de camino, y quienes estamos pagando las consecuencias de un sistema devorador de recursos y personas es **increíblemente perverso**.

Porque no todas somos igualmente responsables. Y nos encontramos ante dos posibilidades. Una, la que ya conoce y propone el sistema capitalista, que básicamente se trata de **decrecer a través del mercado y sus representantes públicos más o menos violentos**, llegando a un **escenario ecofascista** en el que unos pocos acumularán todos los recursos y la inmensa mayoría se quebrará en una sociedad con falta de agua, en permanente inseguridad alimentaria y sufriendo enfermedades y tragedias asociadas al cambio climático.

Pero, ¿a qué nos referimos con «ecofascismo»?

Hasta hace relativamente poco se ha utilizado este término para denigrar al ecologismo por parte de medios de derecha, alertando frente a posicio-

nes que plantean que los recursos del planeta son finitos y que es imposible seguir dejando en manos del mercado su regulación. No gastaremos ni media gota de tinta en ello.

La acepción a la que nos referimos, y que nos preocupa, es aquella con la que describimos un escenario de futuro cada vez más cercano en el que, a través de sistemas políticos y poderes económicos, cada vez menos personas tengan acceso a los recursos materiales necesarios para sostener una vida digna. ¿Cómo? Extrayéndolos de otros lugares, arrebatándolos a las personas más vulnerables.

No desvelamos nada nuevo si decimos que estamos en un momento de enorme deterioro ecológico. Recientemente, la pandemia del coronavirus ha puesto de manifiesto la fragilidad de nuestra sociedad, que entra en crisis sanitaria a consecuencia del ataque a la biodiversidad y los ecosistemas. El modelo de producción capitalista, depredador de territorios, nos pone en riesgo sanitario acabando con las barreras naturales que representa la biodiversidad.

Pero no es el único problema al que nos enfrentamos de manera urgente: la disminución de los recursos hídricos, el agotamiento de las tierras fértiles, la crisis energética o la pérdida de biodiversidad cultivada que permite adaptarse a las condiciones cambiantes del clima o las plagas venideras son algunos de los retos que tenemos ahora mismo sobre la mesa.

El ecofascismo basa su acción en convencernos, por una parte, de que no existe ninguna crisis ecológica, ninguna emergencia climática. Y, por otra, de que hay que adoptar medidas en el ámbito del mercado para garantizar que aquellos que puedan pagarlo sigan pudiendo acceder a los recursos necesarios. Se ayudan, eso también, de un ideario profundamente racista: no hay recursos para todos, y tenemos que protegernos para que no nos los arrebaten.

Cínico, realmente, teniendo en cuenta que España importa el 80 % de la energía y el 75 % de los minerales, fundamentalmente de América Latina y África, y que los alimentos consumidos requieren el doble del territorio nacional. Somos parte de eso que se ha venido a llamar «capitalismo caníbal».

Y ojo, que esta realidad no es incompatible con un descenso del acceso a los recursos por parte de las capas más vulnerables de nuestra sociedad: pobreza energética, falta de alimentos sanos y sostenibles, falta de acceso al agua... Existencias abocadas a vivir en los bordes del sistema aquí y ahora, también.

El término «ecofascismo» también es adecuado si tenemos en cuenta que esa extracción de recursos, en muchas ocasiones, se hace de manera violenta: desalojos de campesinos para quedarse con tierras de interés minero, hídrico o para acceder a tierras de interés ganadero. Siempre con el apoyo de gobiernos que dejan en la cuneta a su propia población por intereses económicos. O, en casos aún más extremos, fomentando guerras en distintos puntos del planeta para hacerse con los recursos necesarios (petróleo, agua, etcétera).

La cuestión ahora es construir una alternativa que haga frente a esta realidad. En mi opinión, y a pesar de los muchos avances que han hecho algunos



países del ámbito de la socialdemocracia, esta no es ni podrá ser quien haga frente al ecofascismo emergente.

¿Por qué falla la socialdemocracia?

Hay una fantástica metáfora acerca de la mano izquierda del Estado, acuñada por el sociólogo francés Pierre Bourdieu, en la que explica que la mano derecha del Estado, generalmente representada por el Ministerio de Economía, pero también nos vale en este caso Industria, v. g., es la mano fuerte, poderosa, la que tiene los recursos y diseña el país y la vida. Bordieu habla de que las áreas sociales de los gobiernos son su mano izquierda: insuficientes, sin poder real, intentando tapar los agujeros sociales que abre la mano derecha.

Las políticas ambientales están también en esa mano izquierda, y no consiguen cambiar las políticas económicas e industriales: la educación ambiental, las campañas de reciclaje o la elección de consumir productos ecológicos, por sí mismos, sirven de muy poco si no enfrentamos un cambio integral del modelo de producción, distribución y consumo.

Hacer frente a la emergencia climática no es solo hacer la transición a las energías renovables. Si sabemos que es imposible hacer una transición a un sistema energético basado al 100 % en energía renovables a escala planetaria, porque las reservas minerales no lo permitirían, ¿qué podemos hacer? Habrá que priorizar el uso de materiales, definir qué es indispensable para una vida digna y qué no lo es, redefinir el modelo de consumo y adecuar la producción a objetivos sociales y ambientales que permitan garantizar esa vida digna a todas y en todo momento.

Hacer frente al descenso de recursos hídricos implica mucho más que sistemas de eficiencia en el uso del agua, o mejora en los sistemas de regadío. Implica una intervención decidida en el uso del agua en la agricultura, en garantizar el mantenimiento de los acuíferos y en planificar una producción alimentaria adecuada a la vocación del terreno. En Andalucía, por ejemplo, solo el 7-8 % de la producción se corresponde con la vocación propia (principalmente, seco). Se busca incrementar la producción en una carrera loca, mientras el desperdicio alimentario no cesa de aumentar y muchas familias no acceden a alimentos frescos con la frecuencia necesaria para tener una alimentación nutricionalmente adecuada.

No estamos ante un problema de solución tecnológica ni económica (en el marco del libre mercado). El capitalismo verde no resolverá con vocación internacionalista ni de futuro el colapso ambiental al que estamos asomados, porque mantiene en su esencia un crecimiento económico que no es posible en un planeta de recursos limitados y con unos límites biofísicos ampliamente sobrepasados.



Estamos ante la necesidad acuciante de poner en pie un sistema político y económico basado en la redistribución de la riqueza y en la planificación democrática de la economía. Volvemos a los clásicos, sí, pero incorporando cuestiones que den respuesta a la situación en la que nos encontramos hoy.

Frente a un ecofascismo que expolia los territorios, pero también la fuerza de trabajo de las mujeres, externalizando tanto los costes ambientales como los cuidados, hemos de defender un modelo ecofeminista y decrecentista:

- Socialización de los medios de producción.
- Socialización de los recursos naturales.
- Socialización de la toma de decisiones.
- Socialización del poder.



92

Decía al principio que había dos opciones. Una de ellas, el ecofascismo. La otra, la que empezábamos a esbozar arriba: **impulsar políticas valientes de planificación democrática** de los recursos y los medios de producción. Necesitamos una intervención valiente en la planificación agraria, en los transportes, en el sistema energético, en la cadena de producción-transformación y consumo... En definitiva, los sectores más responsables de las emisiones de efecto invernadero han de ser puestos en manos del común.

Para ello son necesarias políticas distintas a las que han venido ofreciéndose desde las políticas más o menos verdes del capitalismo de rostro amable, pero que **no es otra cosa que maquillaje verde de las políticas habituales de competencia** y crecimiento. Necesitamos políticas valientes que, desde lo público y desde lo común, nos lleven a redistribuir la riqueza a través de impuestos ambientales, a planificar la necesaria reconversión industrial (cuando no reindustrialización) para rescatar a las comarcas afectadas por el necesario cambio de modelo energético, pero también a los territorios que han sufrido años de desmontaje del tejido industrial para destinarlo a territorios de consumo turístico, sin derechos laborales ni sociales, expulsando a sus habitantes, destruyendo o banalizando el paisaje con construcciones e infraestructuras sin interés ni ninguna conexión con el contexto cultural de la zona y degradando finalmente el medio ambiente hasta límites insospechados en cuanto a la capacidad de carga del lugar.

Necesitamos también políticas de transporte, de servicio públicos, de producción-distribución-consumo... **radicalmente diferentes**. La clave es producir lo que necesitamos como sociedad abandonando de una vez por todas el dogma de mercado de inventar nuevas necesidades para producir más.

Una sociedad basada en otro modelo de relaciones económicas y laborales que ajuste los usos a la capacidad de carga del sistema mientras cubrimos las necesidades de nuestra sociedad: la de aquí y ahora, la de allí y mañana.

Pero, y esto es fundamental, hemos de hacerlo teniendo muy clara la vocación democrática: esta planificación ha de ser hecha no solo *para*, sino *por*

la propia sociedad. Y aquí sí, el papel y la responsabilidad de los pueblos es indiscutible: **quién, cómo, cuándo y cuánto se decrece tendrá que ser planificado meticulosamente** por políticas hechas por la clase que en primer lugar y mayoritariamente va a sufrir las consecuencias del cambio climático y la reducción de recursos. Asumiendo además que los cambios habrán de ser de raíz.

Sin embargo, y teniendo tan claras algunas de las cuestiones, no hemos podido resolver el qué hacer ahora mismo, cómo conseguir que estas medidas que sabemos necesarias para tener un futuro posible en este contexto de colapso sean entendidas, reclamadas e impulsadas por la sociedad en su conjunto.

Corremos el riesgo de caer en la melancolía de la frustración tomando un camino de todo o nada: si las políticas de capitalismo verde no son suficientes frente al ecofascismo que viene y no parece que tengamos cerca la revolución ecofeminista que necesitamos, ¿cuál es el camino? ¿Qué nos llevará más cerca del objetivo deseado? ¿Cómo podemos visibilizar las alternativas e impulsar una conciencia mayor de que la crisis ecológica es, en esencia, el reto más grande que tenemos frente a nosotros y que, sin resolverla, no habrá posibilidad de dar solución al resto de crisis: económica, energética, alimentaria, etcétera?

Aquí tenemos por delante una de las luchas recurrentes en el ámbito de la izquierda: la pugna por la hegemonía cultural.

No creo que las políticas que fían todo a la iniciativa individual sean demasiado útiles. Volcar toda la responsabilidad de la lucha ambiental en las personas consumidoras es una manera exquisita que tienen las grandes empresas y los Gobiernos afines a ellas para no asumir su propia responsabilidad impulsando los cambios legislativos necesarios y, por tanto, también los cambios en los sistemas productivos y de consumo necesarios para reducir el impacto ecológico. Sin embargo, tampoco conseguiremos el respaldo social necesario para poner en marcha todas las medidas necesarias mientras se mantenga la cultura del despilfarro como símbolo de estatus social, y la cultura de la austeridad y del disfrute de los bienes y servicios frente a la propiedad de estos sea vista como «de pobres». Por tanto, acompañar las medidas políticas de una verdadera batalla cultural es indispensable.

Es curioso cómo estos días hemos visto, al calor de las noticias del drama del cierre de Alcoa o Nissan, que algunos aprovechaban para cargar contra el movimiento ecologista que pide un cambio de modelo productivo y la apuesta por una reindustrialización verde y social, como si estos cierres, al igual que en su momento la Naval, la siderurgia, etcétera, fueran fruto de algo distinto que el afán de lucrarse de algunas industrias y de decisiones políticas que nos llevaron a ser la verbena de sol y playa del sur de Europa. Hace años que el movimiento del ecologismo social demanda medidas eficaces para proteger el empleo: no, no nos alegramos cuando anuncian cierres de fábricas o minas y miles de trabajadores quedan en la calle.



Demandamos que el tejido industrial asuma los cambios que ha de hacer para garantizar la protección del medio ambiente, aunque eso implique inversión económica y menores beneficios a repartir entre los consejeros, o implique modificaciones en la cadena productiva para adaptarse a las demandas actuales. Y sabemos, bien lo sabemos, que el gran miedo a la tan denostada «reconversión industrial» estriba en que ha sido mentira. Ha significado tradicionalmente miles de empleos perdidos, territorios devastados y vaciados y el impulso a sectores de bajo valor añadido con alta precariedad y temporalidad en el empleo, sin apenas derechos.

Y es una realidad que los empleos del sector industrial, altamente sindicalizado, son empleos con más derechos, mejor remunerados y más estables (en términos generales) que aquellos correspondientes al tercer sector, e incluso al sector de las energías renovables.

Pero nuestra lucha va precisamente en esa línea: impulso desde las instituciones al cambio de modelo productivo y de relaciones laborales para una transición justa en lo ambiental y en lo social. De intervenir en la planificación industrial no para cerrar empresas, sino para garantizar una producción sostenible en términos ambientales y sociales. Es una obviedad que apostamos por disminuir el número de vehículos privados. Pero es igualmente obvio que reclamamos un aumento del transporte colectivo y, por tanto, se hace necesaria una industria que lo permita, así como numerosos empleos en mantenimiento e industria auxiliar.

Es una obviedad que queremos disminuir el consumo de insumos (plásticos desechables, productos de escasa durabilidad, etcétera) y elevar el consumo de calidad, así como impulsar y extender redes de economía colaborativa que permitan compartir bienes y servicios sin que ello signifique tener la propiedad de los mismos. Y por ello planteamos que hay que producir menos.

Pero se equivocan mucho quienes ven en esta posición un ataque a los empleos. Es un ataque a los beneficios industriales que se hacen a costa de nuestros recursos y nuestros cuerpos; es proponer que se redistribuya la riqueza y las horas de trabajo, para garantizar una vida digna trabajando menos, mucho menos, para trabajar todas. Es un ataque en toda regla a un sistema que produce sin parar, comprometiendo nuestro futuro, para vendernos necesidades que no teníamos envueltas en un móvil de última generación.

Todo esto significan políticas públicas que han de ser sostenidas y apoyadas por la sociedad. Y ahí es cuando vuelvo al principio: necesitamos una revolución cultural que permita poner en marcha estas medidas.

No basta, aunque es condición *sine qua non*, tener una red de transporte colectivo de calidad y que garantice la accesibilidad en horarios y espacios. Es importante también cambiar la mentalidad individualista de que «es necesario tener un coche».



Tampoco bastan políticas contra la obsolescencia programada si no cambiamos la creencia de que tener la última versión de (ponga aquí el dispositivo electrónico de elección) es símbolo de estatus social.

En resumen, poner en pie una sociedad que piensa distinto y consume distinto para que todas, las que están aquí y allí, ahora y mañana, puedan tener acceso a una vida digna con las necesidades cubiertas.

Y para este reto global que tenemos frente a nosotras, será indispensable la unidad de quienes pensamos que es posible construir otra sociedad: la construcción de una hegemonía cultural, en el sentido más gramsciano del término, será imposible sin el concurso y la alianza entre los sectores productivos, el sindicalismo de clase, el feminismo y el movimiento ecologista. ★

